ISSN 1852 3846

SÍNTESIS MUNDIAL

Resumen mensual de los acontecimientos internacionales del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación para la Integración Federal

OCTUBRE 2011

LA MUERTE DE GADDAFI Y EL FUTURO DE LIBIA

La desaparición del lider libio inagura una nueva etapa en la vida política del país africano.

funif
Fundación para la Integración Federal

SÍNTESIS MUNDIAL

SÍNTESIS MUNDIAL
Octubre de 2011
ISSN **1852 3846**

COORDINACIÓN GENERAL CEPI
Carla Morasso

DIRECTOR EDITORIAL
Germán Martínez

CONSEJO EDITORIAL Y DISEÑO
Luciano Herrero
Luciana Rodríguez
Maricruz Scotta

STAFF:
Imanol Barrangú, Graciela Capisano, Julieta Ceresole, Florencia Fantin, Griselda Fernández, Matías Ferreyra, Fabián Grisun, Luciano Herrero, Paula Liveratore, Agustina Lovera, Agustina Marchetti, Paula Martín, Ana Mucci, Rocío Novello, Rafael Pansa, Gonzalo Pascual, Juan Ignacio Percoco, Noemí Rabbia, Luciana Rodríguez, Nabih Yussef Samsón, Maricruz Scotta, Romina Viale.

SÍNTESIS MUNDIAL es una publicación del **CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS INTERNACIONALES** perteneciente a la **FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL**

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL:
Entre Ríos 583 1º piso dpto. B
CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax:
(54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail:
rosario@funif.org.ar
sintesismundial@fundamentar.com

URL: http://www.fundamentar.com

SUMARIO

EDITORIAL — 1

EL MUNDO EN IMÁGENES — 3

AMÉRICA LATINA
Rafael Pansa
¿Qué pasa en Chile? — 4

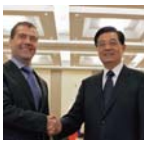
Florencia Fantín
No a la Mercantilización de la Educación — 6

Romina Viale
El "Octubre Negro" de Morales — 8

Imanol Barrangú
Bolivia: Un Laboratorio Jurídico-Político — 10

Gonzalo Pascual
El Complot Terrorista Iraní
y los Miedos de Tabaré — 12

ASIA
Julieta Ceresole
Rusia Busca Afianzar Lazos con China — 14



Agustina Lovera
El Desmantelamiento de
la Dictadura Birmana — 16

Tratado de Asociación
Estratégica Indo-Afgano — 17

ÁFRICA
Noemí Rabbia
"Lo Importante es que Gaddafi Desapareció" — 19

Paula Martín
Malos Vecinos — 22

SÍNTESIS MUNDIAL

EDITORIAL

Es común pensar que los temas o las cuestiones que no son tenidas en cuenta por los medios masivos de comunicación no interesan o no son trascendentes, lo cual es parece ser una costumbre errónea pero inevitable de la cual la Cumbre Iberoamericana no quedó exenta. La misma tuvo lugar los últimos días del mes de Octubre en Asunción, capital de Paraguay, país que celebra el bicentenario de su independencia.

Las Cumbres de Iberoamérica funcionan como foro de diálogo, concertación política y cooperación para los países de América Latina, España, Andorra y Portugal que reconocen como lengua oficial de iure o de facto el español o el portugués. Desde la primera reunión en 1991, se ha intentado mantener ciertas directrices regionales que aúnen los esfuerzos y que redunden en efectivos resultados para todos. Excepto las primeras reuniones que giraron en torno a cuestiones operativas e instrumentales, desde sus comienzos los temas de las sucesivas cumbres giraron en torno al desarrollo, la educación, la integración regional, la gobernabilidad, la democracia eficiente y participativa, la inclusión social, las migraciones y la innovación tecnológica.

Centrándonos particularmente en la XXI Cumbre recientemente realizada, el lema a desarrollar fue la "Transformación del Estado y Desarrollo" como instancia superadora de los cimientos o acuerdos comunes de inicio desarrollados en las anteriores reuniones escogido para el porvenir de nuestras naciones. En este sentido, el presidente anfitrión, Fernando Lugo, subrayó que en la actual coyuntura internacional "se impone una nueva visión del Estado" en la que el mismo recupere el predominio y dirija la lógica del mercado poniéndolo al servicio de la igualdad y el bienestar de los pueblos.

Como resultado de la coincidencia que hubo a la hora del debate y la redacción de los documentos finales se llegó a la Declaración de Asunción que aboga por la implementación de "políticas, programas y acciones orientados a la protección de la sociedad en su conjunto" y en particular a los más vulnerables. En general, se insta a la necesidad de aplicar propuestas que aseguren una adecuada gestión de "lo público" para contar con administraciones "transparentes y eficaces" al servicio de todos los ciudadanos y fortalecer la democracia.

En tanto que los presidentes de Perú y México se expidieron sobre todo en materia económica, centrando sus propuestas en establecer políticas destinadas a disminuir la vulnerabilidad de la región ante la crisis económica que azota a Europa y EE.UU., sin asumir responsabilidades que no nos competen como región y potenciando las estrategias conjuntas. En esta línea se expidió además el primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, diciendo que

la crisis mundial obliga a los países afectados a replantarse su manejo político y económico para mantenerse competitivos: “los choques que han sacudido a la economía mundial son reflejo de los ajustes y reequilibrios a escala mundial. Es un cambio profundo que nos lleva a revisar nuestros hábitos de consumo y nos obliga a reformar y renovar el Estado para volver a ser competitivos”.

Si bien los jefes de gobierno de algunos países como Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil, entre otros, no pudieron asistir por diferentes razones, el detalle que resalta de la Cumbre fue el hecho de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se retiró del recinto en forma de protesta contra la intervención de la representante de Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox, luego de expresar su crítica ante la presencia del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría. Tras exigir que Cox “debería comenzar su discurso pidiendo disculpas por el daño que el BM ha hecho a América Latina y al planeta” preguntó por qué se debe recibir al Banco Mundial en una Cumbre Iberoamericana, a lo que el presidente Lugo le contestó cortésmente explicando que se trata de “un foro amplio y abierto”.

A modo de cierre de la intervención ecuatoriana, Correa se expidió preocupado por las “intervenciones de los países más desarrollados para darnos cátedra de buenas costumbres en política económica” sugiriendo que “en reciprocidad, a la próxima reunión de la OCDE vaya un representante latinoamericano a darles cátedra”.

A la hora de analizar el estado de cosas en el mundo actual, cuyo epicentro es la crisis económica mundial, no debemos desmerecer el rol de la Cumbre Iberoamericana y las propuestas regionales que se plantean ante grandes cuestiones internacionales, sobre todo si consideramos el potencial latinoamericano que se refleja en un indicador elemental, como lo es el incremento del PBI de los últimos años.

LUCIANA RODRIGUEZ

La Muerte de Gaddafi

Los dedos en V, símbolo de la victoria, con un rosario musulmán y la vieja bandera libia, durante la celebración del asesinato del líder libio en la plaza Saha Kish en Benghazi. Los festejos por la caída del que fuera, durante 42 años, gobernante de Libia se han visto atenuados por las circunstancias que rodearon su muerte y por la incertidumbre sobre el futuro del país.

Cristina Fernández

La presidenta argentina fue reelecta con el 54,11 % de los votos en las elecciones nacionales del pasado 23 de octubre. Fernández logró 37,31% por encima de quien ocupó el segundo lugar, Hermes Binner, gobernador de la provincia de Santa Fe quien obtuvo 16,80% de los votos. Mientras que el radical Ricardo Alfonsín resultó tercero en los sufragios, obteniendo el 11,14%.

Brillante ilustración que retrata cómo funciona realmente el famoso “efecto derrame” en la economía. De acuerdo con los teóricos del derrame, la acumulación de riqueza en las capas altas de la pirámide de la población inevitablemente provocará el "derrame" de la riqueza hacia las capas inferiores… Esta viñeta cómica pertenece al caricaturista Clay Bennett y apareció el 19 de octubre en el diario Chattanooga Times Free Press.

¿QUÉ PASA EN CHILE?

POR RAFAEL PANSA

Podríamos empezar diciendo que en Chile no hay ciudadanos sino consumidores; que es un país visto como un gran mercado; que los individuos dejan de serlo al convertirse en deudores, súbditos del poder financiero; pero haremos un esfuerzo y explicaremos en un breve detalle el "Qué pasa en el país trasandino".

En la capital chilena se vienen celebrado unas cuarenta manifestaciones desde que estalló el conflicto estudiantil en demanda de una Educación Pública y de una reforma del Sistema Educativo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo el aporte estatal y favoreció la privatización de la educación.

La historia de las reivindicaciones no comienza sólo hace seis meses, sino que data de marzo del 2006, con el reclamo protagonizado por estudiantes secundarios conocido en adelante como "Revolución Pingüina", llamada así por el uniforme que utilizan los estudiantes secundarios de Santiago. La revolución logra la caducidad de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). La cuál había sido promulgada cuatro días antes de que Pinochet entregara el poder.

La LOCE fue remplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior. Sin embargo, a partir de la Revolución Pingüina, la discusión sale a la calle, logra penetrar en las familias y se establece un vínculo entre el malestar privado y el malestar público por la falta de respuesta del sistema político ante una educación cara.

Actualmente sólo el 40% de los escolares chilenos asiste a colegios públicos gratuitos, mientras que el resto va a escuelas pagas. A nivel universitario, en tanto, no existe la gratuidad.

"Chile es hoy junto con Uruguay uno de los dos países con más PBI de Latinoamérica, pero es el más desigual entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y uno de los quince países más desiguales del mundo."

Sólo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%.

Hay un indiscutible aprovechamiento mediático que utiliza el gobierno de derecha de Sebastián Piñera para deslegitimar las demandas del movimiento estudiantil y criminalizar las protestas. Efectivamente, la prensa ,mayoritariamente de derecha, privilegia en estos momentos las fotografías de Carabineros lesionados, un colectivo quemado y barricadas de fuego, dejando de lado el tema de fondo de las demandas estudiantiles, lo que es aprovechado por las autoridades gubernamentales para sostener que el movimiento ha sido "secuestrado" por los grupos más radicalizados.

Chile es hoy junto con Uruguay uno de los dos países con más PBI de Latinoamérica, pero es el más desigual entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y uno de

los quince países más desiguales del mundo. Parece paradójico que con el aumento del consumo y del ingreso per cápita, una de las tasas de riesgo más bajas del mundo, buenas perspectivas internacionales respecto del desarrollo económico, haya una ciudadanía indignada y pesimista.
Un dato que aquí no podemos dejar pasar es que la educación superior del país trasandino, es la más cara del mundo. Con un valor promedio de 3.400 dólares anuales, el arancel cobrado por las universidades locales se ha disparado sistemáticamente en los últimos veinte años. En el caso de las públicas, sólo entre 1995 y 2005 el alza fue de casi el 100%.
Datos de la OCDE consignan que, a precios relativos, la Educación Superior en Chile es la más cara del orbe. El arancel doméstico equivale al 22,7% del PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón.
El Banco Mundial, al igual que diversas organizaciones internacionales, constató en un informe que "una causa relevante de desigualdad incluye el alto costo de estudiar". Se puede afirmar sin exagerar que, el chileno es un sistema educativo que perpetúa las diferencias de clase, ya que los ciudadanos con menores ingresos no pueden acceder a estudios superiores o se sobreendeudan para realizarlos.
El modelo de educación trasandino, nacido en dictadura y continuado por los sucesivos gobiernos de la Concertación, integra en los debates sobre los proyectos de ley en materia educativa, a los empresarios de la enseñanza. Cualquiera de ellos, como es lógico pensar, tiene como único objetivo, obtener una ganancia, evidenciando de antemano que cualquier resolución de las mesas de negociación, no será otra cosa que "un buen negocio", que quedará lejos de las necesidades del pueblo y convertirá a los ciudadanos en meros consumidores.
Queda a la vista que los sucesivos gobiernos chilenos, no quisieron, ni quieren aún, pensar la educación más que como un bien de consumo. No es llamativo entonces que se siga con-

La líder estudiantil, Camila Vallejos

fundiendo lo que tiene que ser abordado y discutido con seriedad por la sociedad chilena, con lo que puede ser tratado por el mercado. En el Chile de hoy parece imposible que el gobierno abandone su sectarismo, impuesto por ultraconservadores, negando toda posibilidad de permitir una salida plebiscitaria a la crisis actual.
¿Cómo puede un gobierno soportar un reclamo tan multitudinario, con cerca del 70% del apoyo de la población, de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OCDE, el Banco Mundial? ¿Cómo puede gobernar en estas precarias condiciones y hacer caso omiso de una mayoría ciudadana y parlamentaria que rechaza su gestión?
Quizás, la respuesta la hallemos en su sistema de gobierno, en el cual el Parlamento es una institución decorativa de la "monarquía presidencial". Es atribución del Presidente de la República nombrar a las máximas autoridades del gobierno interior del país, los intendentes de las quince regiones y los gobernadores de las cincuenta y tres provincias: un verdadero cesarismo.
La constitución de 1980 posee un mecanismo que le permitió a los sectores golpistas establecer un nuevo orden, blindarlo y garantizar su estabilidad. Efectivamente, la constitución incorporó una serie de "resguardos institucionales" que impiden su reforma, como el sistema electoral binominal y el sistema de quórum exigido para tratar una gran cantidad de temas, y otorga un poder de veto a una minoría para su tratamiento, mecanismo que protege leyes que se tomaron por la dictadura. Se trata de una forma extrema de implementar la forma weberiana de la "jaula de hierro", bajo un orden capitalista, legalista y burocrático, que "determina las vidas de todos los individuos nacidos dentro del mecanismo, con una fuerza irresistible", como sostiene el intelectual Alvaro Ramis.
Dicha constitución le ha permitido imponer a una minoría su modelo económico, político, educacional y social. Luego de esto, le ha otorgado capacidad de veto para que la mayoría no pueda mover un ápice de este sistema sin su consentimiento.
La ex Ministra de Estado chilena, Carolina Thoá, apuntó claramente: "…que ideas mayoritarias dentro de la sociedad no tengan un cauce que haga viable su acogida en los canales constitucionales, es una bomba de tiempo para la democracia y para su credibilidad".
En el fondo, de mantenerse este escenario tenso, serán inevitables las continuas escaladas de violencia. Es necesario que las autoridades políticas den fin al sistema rentista. No es difícil ver que si la crisis de representación continúa y las demandas sociales no son canalizadas por el gobierno, las acciones serán cada vez más represivas de ambos bandos. Alguien deberá ceder y no será el pueblo chileno, como dijo el intelectual de ese país, Alvaro Ramis: "Será mañana o será en diez años, pero a este movimiento sólo le espera una cosa: la victoria".

"el sistema educativo perpetúa las diferencias de clase, ya que los ciudadanos con menores ingresos no pueden acceder a estudios superiores o se sobreendeudan para realizarlos."

POR FLORENCIA FANTÍN

NO A LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Los vientos de protesta por una educación pública y de calidad parecen haber llegado desde Chile a Colombia, y alcanzaron su mayor escalada hasta el momento, el pasado 12 de octubre. La protesta carga con un trasfondo social, político y económico que condiciona a éste país desde varias décadas anteriores. Si bien los estudiantes colombianos se vieron inspirados en los acontecimientos recientes de Chile, hay un hecho concreto que generó los levantamientos, es un problema que se inició en marzo de este año. El controvertido proyecto, promovido por el Presidente Juan Manuel Santos propone reformar la Ley 30 de 1992, principal norma que regula la Educación Superior en Colombia. Según el Presidente, la reforma de la Ley Dicha se basa en cuatro pilares:

1-Promover calidad investigación e innovación: Mejorar sustancialmente la calidad educativa en Colombia promoviendo una educación de mayor calidad, planteando incentivos a la buena calidad y a los procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación. El 10 por ciento de las regalías, será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología.

2-Aumentar los recursos para la Educación Superior: inyectar a la Educación Superior pública, no sólo aportes del Estado, sino también privadas que, según el presidente, no significa privatizar, sino invertir. Se denominarían Instituciones con ánimo de lucro, para lo cual recibirían beneficios tributarios a cambio de aportes a los fondos de becas de Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior)

Se propone también mayor inversión para las instituciones privadas.

Los beneficios de las alianzas público-privadas, en teoría, no solo mejorarán la calidad de la formación y la investigación. Además de que las instituciones de educación superior podrán financiar sus proyectos de expansión y mejoramiento con créditos de FINDETER (financiera de desarrollo territorial), con respaldo de sus obligaciones a través de un fondo de garantías.

3-Tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional: Un tercer objetivo de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. Es decir, debe ser útil y pertinente para las regiones del país, y también para cumplir con los estándares internacionales como los que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

4-Garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno: También se exige la rendición de cuentas de los gastos de las universidades para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de la utilización de los recursos recibidos por las instituciones de las metas alcanzadas con estos recursos.

Las primeras manifestaciones en disconformidad con estas reformas se llevaron a cabo el 7 de abril de este año. Si bien los protestantes reconocían la necesidad de un cambio en la Ley de Educación, no estuvieron de acuerdo con el cambio que pretendía el ejecutivo.

Es importante señalar que ése levantamiento fue uno de los que golpeó más fuertemente a la joven gestión del presidente Santos. Estuvo constituido por cien organizaciones representantes de diferentes sectores sociales y políticos, entre ellos se encontraban la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, las confederaciones de Trabajadores de Colombia, la confederación de pensionados de Colombia, la Federación Colombiana de Educadores, la Gran Coalición Democrática, la Federación Nacional de Profesores Universitarios, Recalca, Reclame, la Minga Nacional Indígena y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, la Confederación de Pensionados de Colombia, el Polo Democrático Alternativo, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, organizaciones campesinas, comunales, juveniles, de mujeres etc.

Si bien al proyecto original se le realizaron diferentes modificaciones, en relación con la propuesta original, las reformas no convencieron a ninguno de los distintos sectores. En efecto, se eliminaron varios artículos como los relacionados con la inversión privada con ánimo de lucro, el más criticado por los manifestantes, y otros fueron mejorados. Sin embargo, las presiones de estudiantes, sindicatos y profesores volvieron a

la escena política en las últimas semanas y se concretaron en la exigencia de que se retire el proyecto y el gobierno se siente a hablar de igual a igual y así poder llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Los estudiantes, en primer lugar, declaran que tal eliminación no resuelve el problema de fondo que necesita la ley de educación. Ésa reforma establece un modelo educacional muy similar al que está actualmente vigente en Chile. Sostienen que la reforma implica pérdida de calidad, deterioro en el sentido de lo público, y de la conciencia crítica de lo que ellos creen debe tener la universidad. Ya que con la nueva propuesta la mayoría de los consejos superiores universitarios (CSU) de todas las universidades públicas quedarían en manos de los gobernadores y alcaldes, lo que implicaría entregarse a la dirección de los caprichos de los políticos regionales y la burocracia. En segundo lugar, refutan el pilar de financiación ya que está asociado a una deuda que tiene el Estado desde 1992 con los diferentes entes educacionales. Por ello mismo es que pretende realizar préstamos a los estudiantes, a saldar una vez recibidos. Sin embargo, ése dinero del préstamo disminuiría las subvenciones del Estado a las universidades, por lo cual el precio de las matriculas se inflarían demasiado para lo que el estudiantado está dispuesto a poder pagar.
Como resultado de la criminalización de las protestas por parte del Estado, y gran parte de la sociedad, las mismas han sido reducidas por el ejército. Los medios de comunicación más poderosos han tomado posición con respecto al conflicto difundiendo imágenes sólo de los "desastres" que dejan las protestan y en cuán "violentos" son las movilizaciones de este sector y no esclarecen cuáles son las peticiones del mismo. Y, el Presidente ha declarado:"
A pesar de ello, por un lado, el Presidente ha propuesto los "Acuerdos para la prosperidad", una política que incentiva la participación y consulta de la población en determinadas cuestiones, como posible espacio de debate y resolución de los conflictos que generó la reforma de la Ley Superior de Enseñanza. Para lo cual la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha patrocinado la realización de 28 foros en universidades de todo el país.
Pero, por otro lado, Santos ha declarado en los diferentes medios de comunicación: Me he puesto en el ejercicio de ponerme en los zapatos de los diferentes actores para ver dónde podría encontrarle a esta reforma algo con lo cual se decida a salir a protestar. Me puse en los zapatos de los profesores, me puse en los zapatos de los rectores, hice un examen poniéndome en los zapatos de los padres de familia y de los propios estudiantes, y con esas diferentes ópticas analicé bien la reforma, artículo por artículo, y les confieso que no encontré ninguna razón para salir a protestar".
Entonces, ¿hasta qué punto habrá una apertura por parte del Presidente frente a las peticiones del estudiantado y los sindicatos, si hasta ahora sólo ha criminalizado sus protestas? ¿Cómo pretende lograr un consenso con éste sector si ha declarado que no encuentra ningún motivo por el cual haya necesidad de semejante movilizacion?, y por otro lado, ¿los ha invitado a formar parte de un espacio desde donde debatir propuestas congeladas por su gabinete presidencial?
Frente a una coyuntura internacional de lucha contra las leyes del sistema de mercado, las movilizaciones buscan que el Gobierno mejore condiciones salariales de maestros, pensionados, empleados; mejoras en derechos laborales y sindicales; y, el estudiantado, la posibilidad de poder educarse sin tener que vivir anclados a una deuda eterna. En Chile todavía continúan con las negativas del ejecutivo a implementar un cambio de fondo, ¿será que en Colombia marcarán la diferencia?

“Frente a una coyuntura internacional de lucha contra las leyes del sistema de mercado, las movilizaciones buscan que el Gobierno mejore condiciones salariales de maestros; mejoras en derechos laborales y sindicales; y, el estudiantado, la posibilidad de poder educarse sin tener que vivir anclados a una deuda eterna.”

EL "OCTUBRE NEGRO" DE MORALES

POR ROMINA VIALE

El gobierno de Evo Morales se encuentra atravesando una de las etapas más conflictivas luego de haber sido reelecto en el 2010 con el 64% de los sufragios emitidos. Lo llamativo de la situación actual es que el principal sector combativo al gobierno es el de los indigenistas; una de las bases en las que se apoyó Morales para llegar a la presidencia.

El principal disparador de la larga serie de conflictos en el país fue la construcción de una carretera en el seno del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, conocido como Tipnis, que tuvo como hito principal una caminata de más de mil quinientos indígenas desde la ciudad de Trinidad hacia La Paz en protesta por la iniciativa. No obstante, suscitó el desarrollo de otras consecuencias directamente relacionadas: el inicio de una huelga general por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), la renuncia de dos ministros y altos funcionarios, las protestas de los cocaleros y el resultado negativo obtenido por el gobierno en las elecciones judiciales; tras las que, pese a haber arribado a una resolución del conflicto central, dejan al gobierno con cierto sabor amargo.

En lo que respecta a la carretera, la misma es considerada por el gobierno como una obra fundamental para el desarrollo económico y comercial del país. Consiste en 306 kilómetros que une las localidades de Villa Tunari en el departamento de Cochabamba, con el de San Ignacio de Moxos en Beni, en el norte de Bolivia. Beni es el principal productor ganadero del país, y sólo posee conexiones viales con Cochabamba, por lo que el principal argumento que esgrimen los defensores de la obra vial es que con ella se favorecería la seguridad alimentaria del occidente. Asimismo, otro de sus beneficios es que se conectaría transversalmente con el corredor bioceánico –en proceso de instauración- que se extenderá a lo largo del continente, desde Chile a Brasil.

El conflicto lo generó un tramo de 177 kilómetros que, según la planificación inicial del gobierno, atravesaría el corazón de la reserva natural, espacio en el que viven unos 15 mil nativos que rechazan la iniciativa por cuestiones ambientalistas, bregando por mantener su estilo de vida. Para ellos, la construcción destruirá la reserva forestal y de agua dulce más grande del país –de 1,2 millones de hectáreas-, ya que implicará el arribo de los cocaleros en la búsqueda de nuevos terrenos para sus plantaciones, y con ellos la inminente deforestación.

"Lo llamativo de la situación actual es que el principal sector combativo al gobierno es el de los indigenistas; una de las bases en las que se apoyó Morales para llegar a la presidencia."

Los reclamos se iniciaron el 15 de agosto en la ciudad de Trinidad, con una caminata de más de 600 kilómetros, hasta arribar a la ciudad de La Paz con el objetivo de reunirse con el Presidente Morales. La misma fue organizada y dirigida por las principales organizaciones indigenistas, entre ellas la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); además, con el paso de los días la misma fue ganando adeptos, nucleando a otros sectores sociales y fortaleciéndose, provocando titubeos e idas y vueltas en las decisiones presidenciales.

Así, luego de una fuerte represión policial para dispersar a los manifestantes, el presidente anunció una suspensión de la construcción. Pese a que el subcomandante de la Policía, el general Óscar Muñoz, aseguró que los agentes actuaron después de haber sido provocados por las amenazas de indígenas armados con arcos y flechas, Morales calificó al accionar policial como "imperdonable". Esta

situación generó un apoyo de diversos sectores urbanos a la causa de los pueblos originarios, tanto es así que la COB –principal organización sindical del país- llamó a una huelga general exigiendo el castigo de los responsables de la represión.
Frente a este panorama de repudio social, Morales tuvo que realizar un cambio forzado en su gabinete: reemplazó al Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti por Wilfredo Chávez, y nombró a Rubén Saavedra al frente de la cartera de Defensa, en lugar de Cecilia Chacón. A esta crisis de gobierno, se sumaron las renuncias de un viceministro y varios funcionarios de menor jerarquía, y la pérdida de diputados oficialistas. Para los analistas, esta situación constituye la peor crisis de gobierno que deberá sortear Morales desde que llegó a la presidencia en el 2006.
Lejos de suspender la obra, Morales determinó una cancelación parcial y anunció la realización de una consulta popular en los departamentos de Cochabamba y Beni, para que sea el propio pueblo el que decida sobre la carretera.
Finalmente, y luego de 65 días de recorrer más de 600 kilómetros, los indígenas llegaron a La Paz, recibidos por una multitud de bolivianos que se congregaron en la Plaza de Armas para manifestarles su apoyo. La fortaleza que adquirió la manifestación y los acontecimientos previamente descriptos generaron que, luego de una reunión y de que el Congreso tratara las modificaciones a la norma, se adoptara la Ley 180 que recoge las demandas de los pueblos originarios y varios de los reclamos adicionales por los que se movilizaron.
Lo destacado de la misma, es que declara a la reserva del Tipnis como intangible, y suspende la consulta popular que planeaba realizar el gobierno, cancelando definitivamente la instauración del tramo que iba a atravesarla. Asimismo, la norma prevé medidas para evitar la ocupación ilegal de tierras en la zona y la creación de una comisión tripartita entre el gobierno, los indígenas y el sector privado, entre otras consideraciones.

En el acto realizado en el palacio del Quemado, con la presencia de Morales y de los principales dirigentes indígenas, Evo recordó que la construcción de la carretera no fue un capricho personal, sino que constituyó la respuesta al reclamo de más de doscientas organizaciones sociales. Además reprochó el accionar de grupos de la oposición que se aprovecharon de la situación infiltrándose entre los manifestantes, tensionando el diálogo y buscando desestabilizar al gobierno y acusó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de prestarles su apoyo.
Los dirigentes indígenas, pese a manifestar su conformidad por la cancelación de la obra, anunciaron que la represión policial fue un hecho criminal que no puede quedar impune y mantendrán la denuncia por genocidio realizada ante la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, la cual tendrá un mes para expedirse sobre la acusación en contra del gobierno.
Para los sectores de la oposición, la Ley 180, constituye una derrota del gobierno de Morales y un nuevo retroceso frente a un reclamo social como sucedió en diciembre pasado con el frustrado incremento en el precio de la gasolina, acontecimiento conocido como el "gasolinazo". Asimismo, para los medios de prensa locales Morales sufrió un desgaste de su imagen popular, sobre todo después de la represión policial, y ello quedó de manifiesto en los resultados negativos obtenidos en las votaciones para candidatos judiciales que se realizaron en el mes de octubre, en las cuales los principales porcentajes correspondieron a los votos en blanco y nulos. No obstante para Iván Canelas, Ministro de Comunicación, el gobierno salió fortalecido del conflicto, destacando que "la solución de los problemas siempre fortalecen a todos, en este ámbito hemos demostrado que el diálogo es el mejor de los caminos para la solución de los problemas".
Morales se embanderó durante su actividad como sindicalista cocalero, en su carrera presidencial y durante los años que lleva en el poder, tras la instauración de un Estado plurinacional, bregando por el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios y su empoderamiento. Tanto es así, que en el año 2009 se aprobó la nueva Constitución del país que recoge todas las reivindicaciones previas. Sin embargo con el accionar demostrado durante este conflicto, los analistas hablan de un creciente pragmatismo del gobierno. Quien, según estos, se alejó de las consideraciones ideológicas más radicalizadas para fomentar un acercamiento con otros sectores sociales fundamentalmente las clases medias urbanas; es decir, destacan las diferencias crecientes entre la retórica y el ejercicio del Ejecutivo.
Al margen de estos debates, uno de los líderes indigenistas, Fernando Vargas, pidió a Morales "respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir. En un gobierno indígena queremos que se respeten los derechos indígenas".
Lo cierto, es que esta situación colocó al gobierno en el centro de las diputas entre sus bases. No sólo los indígenas se revelaron en contra de una medida adoptada por el primer Presidente indígena del país, ampliamente respetado y admirado; sino que también deberá atender los reclamos de los cocaleros de los cuales Evo aún es el máximo dirigente. Quienes se manifestaron proclives a la instauración de la carretera, por favorecer sus intereses económicos. Los reclamos que el sector está iniciando en la zona de Cochabamba prevén complejizar la situación.
A diferencia de lo ocurrido en situaciones anteriores de conflictividad social, fueron las propias bases de apoyo al gobierno del MAS las que lo ubicaron en el centro de una disputa de intereses, haciendo atravesar al gobierno por lo que muchos ya se atreven a llamar el "octubre negro" de Morales.

POR IMANOL BARRANGÚ

BOLIVIA: UN LABORATORIO JURÍDICO-POLÍTICO

El pasado 16 de octubre se produjo un hecho histórico en Bolivia y el mundo entero. El pueblo boliviano fue llamado a las urnas para elegir en forma directa 56 magistrados del Poder Judicial y así democratizar una institución que parecía hasta ahora inalterable.
En un clima de tranquilidad y sin ningún incidente unos 5,2 millones de personas cumplieron con su deber ciudadano acudiendo a las urnas para elegir jueces titulares y suplentes, de entre 115 candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Para entender el fenómeno

La elección popular de los jueces es una consecuencia directa de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia impulsada por Evo Morales en 2009 y ampliamente aceptada por la ciudadanía. Esta nueva Carta Magna del pueblo boliviano marca un profundo cambio en las estructuras jurídico-constitucionales del país que regían desde 1967. Uno de los cambios fundamentales se produce en la definición de la nueva naturaleza del Estado. De acuerdo a su artículo primero, Bolivia se constituye como un Estado plurinacional fundado en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Este concepto de pluralismo jurídico se ha transformado en el fundamento del nuevo Sistema de Justicia del país. Sistema que, por otro lado, es único en el mundo, ya que habilita a los ciudadanos a elegir directamente a las máximas autoridades de los distintos órganos judiciales. Países como Méjico, Perú o Estados Unidos ya conocen la elección directa de sus jueces, pero ésta sólo se realiza para las instancias judiciales inferiores. De esta manera, Bolivia se convierte en uno de los países más avanzados en materia de regulación del Sistema Judicial y en un posible ejemplo a seguir en la región.

"Bolivia se constituye como un Estado plurinacional fundado en el pluralismo jurídico. Este concepto se ha transformado en el fundamento del nuevo Sistema de Justicia. Sistema que es único en el mundo, ya que habilita a los ciudadanos a elegir directamente a las máximas autoridades de los distintos órganos judiciales."

El fenómeno no deja por cierto de sorprender. Siglos de teoría política (democrática) enseñaron que solo los Poderes Ejecutivo y Legislativo debían ser elegidos por sufragio universal. El Poder Judicial y sus miembros no podían estar sujetos al voto popular ni a los cambiantes deseos de las masas. El juez, en aras de su imparcialidad, debía abstraerse de toda vicisitud para aplicar correctamente la ley y encontrar así el verdadero significado del concepto de justicia. Al romper con estas ideas, Bolivia inicia una verdadera revolución en el campo de la teoría y praxis político-jurídico, que llamativamente no captó demasiado la atención. Sus detractores argumentan el peligro de la politiza-

ción de la justicia y la posibilidad de que los candidatos sean elegidos por sus simpatías con la población y no por sus capacidades reales. Sin embargo, hay que destacar al respecto, que los candidatos tienen prohibido realizar campaña en su favor y los partidos políticos no pueden expresar sus simpatías por alguno de ellos. Solo el Órgano Electoral está autorizado para difundir los méritos de cada candidato.
La innovación boliviana radica en el aumento de la accountability del Órgano Judicial que supone esta nueva metodología de selección de magistrados. En efecto, la justicia ha sido objeto de muchas críticas por parte de la sociedad, las cuales están dirigidas, en su mayoría, a la lentitud de su proceder, a privilegios desproporcionados, a la poca vinculación de sus miembros con los valores o necesidades del pueblo o a la discriminación sistemática de que son objeto las poblaciones indígenas. Con este nuevo sistema de selección de jueces, los candidatos no solo deberán exhibir grandes méritos, sino que también deberán rendir cuentas a la ciudadanía para acceder a los más altos cargos.
La nueva Ley del Órgano Judicial no significa otra cosa que la eliminación del racismo, la impunidad, la discriminación y la extorsión de la justicia boliviana.

La UNASUR resaltó la legitimidad absoluta de este proceso por cuanto nace de la norma constitucional y Denis Racicot, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, consideró al acontecimiento como algo "inédito en materia de avance de los Derechos Humanos".

Los resultados y sus consecuencias

En los últimos días del mes de octubre se comenzaron a conocer los resultados. El voto en blanco rondó el 16%, pero la atención se centró en el elevado número de votos nulos que, en algunos casos, superó a los efectivos. Según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, aquel alcanzó un histórico porcentaje, casi el 50%. En los casos del Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura, los votos efectivos se impusieron en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, mientras que el voto nulo alcanzó la mayoría en los departamentos orientales (Chuquisaca, Beni, Santa Cruz y Tarija). El resultado general para estas vacantes muestra una leve mayoría a favor del voto nulo. Para los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del total nacional, los votos válidamente emitidos apenas superaron a los nulos y en algunas mesas de Santa Cruz y Oruro, debido a irregularidades, la votación tuvo que repetirse.
Estos magros resultados ponen en cuestión no solo la legitimidad de los candidatos, sino incluso todo el proceso electoral. La mayoría del arco opositor (partidos políticos y medios de comunicación) ha intentado desprestigiar las elecciones e incluso transformarlas en un plebiscito de la gestión del presidente Morales. Nada de eso. La jornada del 16 de octubre no tuvo como objetivo evaluar la gestión o las medidas del actual gobierno si no poner en práctica la totalidad de la nueva Constitución boliviana. De ahí que resulte incorrecto hablar de una derrota gubernamental o de una victoria de la oposición.
La Comunidad Internacional también se ha expresado al respecto y ha acompañado las elecciones. La Organización de Estados Americanos elogió vivamente la nueva metodología. El jefe de la misión del organismo, Martín Torrijos, reunido con el Presidente Morales, resaltó la gran participación popular, lo enraizada que esta la democracia en el país, y el nuevo e inédito camino que se abre en Bolivia. UNASUR también envió una misión de acompañamiento que resaltó la "legitimidad absoluta de este proceso por cuanto nace de la norma constitucional". Por su parte, Denis Racicot, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, considero al acontecimiento como algo "inédito para la humanidad en materia de avance de los Derechos Humanos".
Más allá de los resultados, los cuales pueden estar condicionados por la difícil coyuntura política que atraviesa el país con las poblaciones indígenas, por lo novedoso del nuevo sistema o por la escasa difusión de méritos de los candidatos, Bolivia se ha transformado en un verdadero laboratorio jurídico-político. Solo el futuro nos revelará las verdaderas consecuencias de esta innovación.

POR GONZALO PASCUAL

ARGENTINA: EL COMPLOT TERRORISTA IRANÍ Y LOS MIEDOS DE TABARÉ

En el último mes, el presidente Barack Obama anunció que los servicios del la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) lograron desmantelar un complot terrorista que tenía entre sus objetivos atacar las embajadas de Arabia Saudita e Israel en todo el mundo. Un detenido y un prófugo iraníes son los acusados por el gobierno estadounidense, el cual además denunció que el fallido atentado tenía el aval y el soporte financiero de Irán. De esta manera, Argentina se vio involucrada como una de las grandes víctimas del supuesto plan mundial, teniendo en cuenta los atentados sufridos en la década del '90, los cuales tienen como principales sospechosos a ex funcionarios del gobierno iraní.
El macabro complot terrorista que habrían descubierto el FBI y la DEA tendrían como objetivos principales el asesinato del embajador saudí en Washington y dos atentados en las embajadas de Arabia Saudita e Israel en EEUU. El documento oficial que hizo circular el Departamento de Justicia estadounidense también indica que luego de conseguir estos dos objetivos, se iba a continuar con más atentados a las demás embajadas israelíes y sauditas de todo el mundo.
Si bien en ningún documento o declaración se nombra explícitamente a Argentina, la agencia de noticias estadounidense ABC News publicó cierta información donde se establece que unas de las principales embajadas de estos dos países a atacar serían las que se encuentran en Buenos Aires.
Sin embargo, como ni la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) ni INTERPOL recibieron información sobre el supuesto ataque en Buenos Aires, Argentina cuestionó la fiabilidad de la información, otorgada al país oficialmente por el encargado de negocios estadounidense, Jefferson Brown, la cual provenía de la agencia de noticias norteamericana y no era más que un supuesto.
El hecho de que Argentina rehusara a creer precipitadamente en la información proveniente de ABC News, hizo tensar las relaciones entre nuestro país y EEUU. El gobierno de Cristina Fernández prefirió realizar una investigación propia sobre si había realmente probabilidades de que tengan lugar los atentados a las embajadas de Israel y Arabia Saudita en Buenos Aires, aunque de todas maneras, por precaución se reforzó la seguridad de los dos edificios en cuestión.
La realidad marca que hoy por hoy, no hay grandes probabilidades de que ese aparente ataque se haga realidad. Si se parte desde la base, se podrá apreciar que el mismo Gobierno iraní rechazó desde un primer momento las acusaciones hechas por EEUU.
Otros hechos también dan por tierra las vinculaciones denunciadas por EEUU entre los acusados e Irán. A nivel internacional desde el gobierno de Ahmadineyad llegaron voces rechazando estas acusaciones y diciendo que se habían hecho para desviar la opinión pública estadounidense de los fracasos que tiene el gobierno de Obama en materia económica y en política exterior. Además, para mediados de octubre, el gobierno de Teherán se mostró dispuesto a investigar las supuestas conexiones entre los terroristas acusados y los funcionarios del Gobierno iraní, para ayudar a esclarecer si en verdad existieron o no, sin dejar de rechazar las acusaciones.
Así, el canciller de Irán, Ali Akbar Salehi, declaró ante agencias de noticia sirias: "Estamos listos para examinar con cuidado cualquier cosa, incluso si se tratara de un invento. Hemos pedido a EEUU que nos suministre información sobre este escenario"
Con respecto a los atentados que tendrían lugar en Buenos Aires, el encargado de Negocios de Irán en Argentina, Alí Pakdaman, dijo a Página 12 que las denuncias de EEUU son "un armado rudimentario que no se lo puede creer nadie. (…) Y, encima, meten a la Argentina a través de una agencia periodística". De esta manera negaba que Irán haya pensado llevar a cabo semejantes ataques terroristas en todo el mundo, incluyendo a Argentina.
El funcionario también llamó la atención en que EEUU teme el nuevo vínculo que se está comenzando a construir entre Argentina e Irán, y agregó que "ahora que ambos tenemos la voluntad de colaborar para encontrar justicia, ellos (los estadounidenses) vuelven a manipular las cosas para que no se pueda concretar esta colaboración (en la investigación de los ataques terroristas a la AMIA y la embajada de Israel)".
Con estos ánimos de cooperación y acercamiento hacia un dialogo productivo, aunque no fácil de lograr, el propio Ahmadineyad felicitó a la Presidenta argentina una vez que fue reelecta y le expresó sus deseos de que la relación siga desarrollándose hacia un mejor entendimiento y colaboración para la dilucidación de la verdad ante la justicia.

La ficticia guerra de Tabaré Vázquez

A principios de Octubre las relaciones entre Argentina y el país hermano de Uruguay parecieron estar amenazadas por las declaraciones que el Ex presidente oriental, Tabaré Vázquez, realizó durante una charla que dio a estudiantes de un colegio en Montevideo. Afortunadamente, sus dichos no pasaron a ser más que una mala anécdota en las relaciones bilaterales, aunque a nivel de escenario político interno de Uruguay, éstos hayan significado a Vázquez su alejamiento de la vida política, en principio, para siempre.
El comienzo de la ingrata sorpresa, tanto para Argentina como para Uruguay, se dio durante el encuentro que tuvo el Ex presidente con alumnos del colegio Monte VI, ubicado en la capital uruguaya. Durante el mismo, hubo un momento en el cual Vázquez comenzó a hablar de la controversia que tuvo lugar entre los dos países rioplatenses durante su gobierno por la instauración de la papelera Botnia (hoy UPM) sobre el río Uruguay. En esa ocasión fue cuando el uruguayo expresó que como presidente se planteó todos los escenarios posibles: desde que se solucionara todo rápidamente como hasta que se pudiera llegar a un conflicto bélico. A partir de entonces, no pararon de escucharse expresiones críticas y de sorpresa sobre sus inesperadas declaraciones, tanto del lado uruguayo como del lado argentino. No contento con esto, y advirtiendo que por más que pareciera una locura así era la realidad, el ex mandatario contó a los alumnos que se reunió en aquella ocasión con los Comandantes en Jefe de las diferentes Fuerzas Armadas para plantearles el posible escenario bélico. Luego, continuó diciendo que éstos le hicieron saber que Uruguay no estaba en condiciones de comenzar ni soportar una guerra contra Argentina, a pesar de lo deterioradas que estaban sus fuerzas. Consecuentemente, continuó explicando, decidió ir a buscar apoyo estadounidense durante una misión comercial que realizó a fines de noviembre de 2006, donde habría consultado con Condoleezza Rice esta posibilidad.
Ante semejantes declaraciones, los primeros en expresar su oposición e ingrata sorpresa fueron los políticos uruguayos, tanto del oficialismo como de la oposición, por un lado, y los ambientalistas de Gualeguaychú y algunos políticos argentinos, por otro.
La voz más significativa del cuerpo legislativo oficial de Uruguay, la primera dama y senadora Lucía Topolansky, dijo que la noticia la descolocó totalmente y no tardó en aclarar que ésa no es la posición del gobierno actual. A su vez, por parte de la oposición uruguaya, el diputado del Partido Nacional, José Cardoso, calificó al manifiesto de Tabaré como un "strip tease" mediático y apuntaló que "la política intervencionista de los Estados Unidos debe estar absolutamente errada de cualquier pensamiento político en la región" refiriéndose obviamente al pedido de colaboración militar que realizó Vázquez al país del norte, cuestión que más irritación provocó a nivel interno en Uruguay.
Del lado argentino, los primeros en expresar su repudio a las susodichas declaraciones fueron los ambientalistas de Gualeguaychú quienes realizaron una manifestación hacia el puente San Martín (que une Gualeguaychú con Fray Bentos) para demostrar su rechazo, pero sin cortar el camino, marchando al costado de la ruta.
Los principales lideres del movimiento de Gualeguaychú dijeron que nunca llegaron a pensar, ni aún en los momentos más tensos, una idea semejante a la expresada por Tabaré Vázquez. Igualmente, no se quedaron atrás los dirigentes políticos argentinos, quienes despreciaron las confesiones del ex mandatario oriental y, en el particular caso del ex canciller, Rafael Bielsa, que llegó a ser muy duro con el uruguayo, a quién lo calificó de muy ignorante, en especial en temas como el Derecho internacional y las Relaciones Internacionales.
Sin embargo, no hay que olvidar las declaraciones del entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien dejó bien en claro la posición argentina del momento al decir que "nosotros nunca avizoramos, ni remotamente, la posibilidad de un conflicto bélico con Uruguay".

"Tabaré Vázquez trató de justificar sus planes bélicos en la actitud de los manifestantes de Gualeguaychú, de los militantes de Greenpeace y del ex presidente Néstor Kirchner, quienes le dieron indicios a Tabaré de que Argentina planeaba montar un escenario bélico en la zona."

Frente a todo el revuelo armado y los ataques recibidos desde ambos lados de la frontera, Tabaré Vázquez trató de justificar sus planes bélicos en la actitud de los manifestantes de Gualeguaychú, de los militantes de Greenpeace y del ex presidente argentino Néstor Kirchner, quienes le dieron indicios a Tabaré de que Argentina planeaba montar un escenario bélico en la zona. A los manifestantes los acusó de amenazar con ir a manifestar con dinamita en mano a Uruguay y con ocupar la planta de Botnia. Con respecto a los militantes de Greenpeace, los acusó de tirar al agua a un oficial de Prefectura uruguaya mientras hacían una manifestación en el río Uruguay. Por último, al ex mandatario argentino lo acusó de haber declarado asunto nacional el tema. Prontamente estas justificaciones fueron refutadas una por una, hundiendo más aun la posición de Vázquez en Uruguay.
Con respecto a las acusaciones contra los manifestantes, se pudo confirmar que lo de la dinamita fue una solitaria voz dentro del movimiento a la cual nadie apoyó. Siguiendo con lo demás, hay que diferenciar que, coincidiendo con lo que dijo Alberto Fernández a una radio uruguaya, una cosa es la agresividad que pueden expresar los ciudadanos argentinos y otra cosa es la agresividad del Estado argentino.
Considerando las acusaciones contra Greenpeace, éstas fueron desmentidas por la ONG, lo que descalifica la posición de Vázquez por basarse en una mentira.
Por último, respecto a las acusaciones contra Néstor Kirchner, lo máximo que hizo el ex presidente fue apoyar en ese momento a los asambleístas y nunca fue más allá, hacia una postura bélica.
Después de todos estos sucesos, y para cerrar esta desafortunada escena internacional, hizo su aparición la actual primer mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien desde Gualeguaychú le envió un mensaje al gobierno de Mujica con la intención de restarle importancia a los dichos de Tabaré Vázquez, diciendo "que (Pepe Mujica y a su esposa) tengan la tranquilidad que nadie puede confundir a esta Presidenta y mucho menos a los argentinos, que somos hombres y mujeres de paz".
Cerrada ya la situación, el resultado para Vázquez fue el pedido de disculpas tras semejantes declaraciones y su seguida renuncia a la vida política de su país.
A nivel internacional, la situación llevó a un fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y Uruguay, cumpliendo con la ley primera del Martín Fierro y evitando que meros dichos sin fuertes fundamentos puedan resquebrajar una relación casi única de hermandad a nivel mundial.

POR JULIETA CERESOLE

RUSIA BUSCA AFIANZAR LAZOS CON CHINA

El pasado martes 11 de octubre el Primer Ministro Vladímir Putin se dirigió a la Republica Socialista China, buscando asentar la relación estratégica entre ambos países. En este contexto Rusia y China firmaron 16 acuerdos por un monto de unos 5.100 millones de euros en materias tales como siderurgia y energía atómica, así como también un memorando de modernización económica y otro para afianzar la cooperación agrícola. Tras reunirse con su colega chino, Wen Jiabao, Putin manifestó que el comercio bilateral entre los dos países ha superado ya el nivel anterior a la crisis de 2008, y en 2011 oscilará entre los 70.000 y 80.000 millones. Hu Jintao a su vez ha señalado que es muy importante y bien recibida la búsqueda de una cooperación estratégica entre países por parte de Putin.

A medida que la URSS comenzaba a derrumbarse y el fin del enfrentamiento ideológico se hacía inminente -en el cual la rivalidad entre los dos países se caracterizaba por el intento de erigirse en el portavoz de comunismo a nivel mundial frente al capitalismo occidental- ambos países normalizaron sus relaciones, emergiendo así la "asociación estratégica" entre los dos colosos, hecho que quedo sellado con la visita de Mikhail Gorbachov a la Republica Oriental. Este acercamiento tuvo que ver en parte, con la necesidad de Rusia de establecer nuevas alianzas luego del colapso del comunismo soviético frente a la ideología capitalista, para poder así sortear la grave crisis socioeconómica que en ese entonces padecía.

Es así que en 1994 surge la llamada "asociación constructiva" que en 1996 devendrá en una "asociación estratégica", luego que las relaciones entre China y la Unión Europea sufrieran un desgaste por sus diferentes posturas respecto a la cuestión del Estrecho de Taiwán. En 1997 luego de la visita de entonces mandatario de China, Jiang Zemin, a Rusia, se firma La Declaración Conjunta sobre un Mundo Multipolar y el establecimiento de un Nuevo Orden Internacional.

Esto demuestra que existen intereses en común y que se pretende dar continuidad a esta asociación, por lo cual no estaríamos hablando de una alianza en términos realistas. Existe la voluntad de cimentar estos lazos a lo largo del tiempo. En este orden se siguió a lo largo de estos años con declaraciones bilaterales en lo que respecta a seguridad fronteriza, multilateralismo, cooperación económica, energética, cultural y tecnológica.

De esta manera, durante la presidencia de Putin se continuó con esta política de apertura hacia Asia Oriental, y las relaciones con China continuaron avanzando, aunque muy lentamente. Ejemplo de esto queda demostrado en junio del presente año cuando Hu Jintao y Dmitri Medvedev, con motivo de motivo del décimo aniversario del Tratado Bilateral de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, reafirmaron la necesidad de fomentar la cooperación estratégica mediante una Declaración Conjunta.

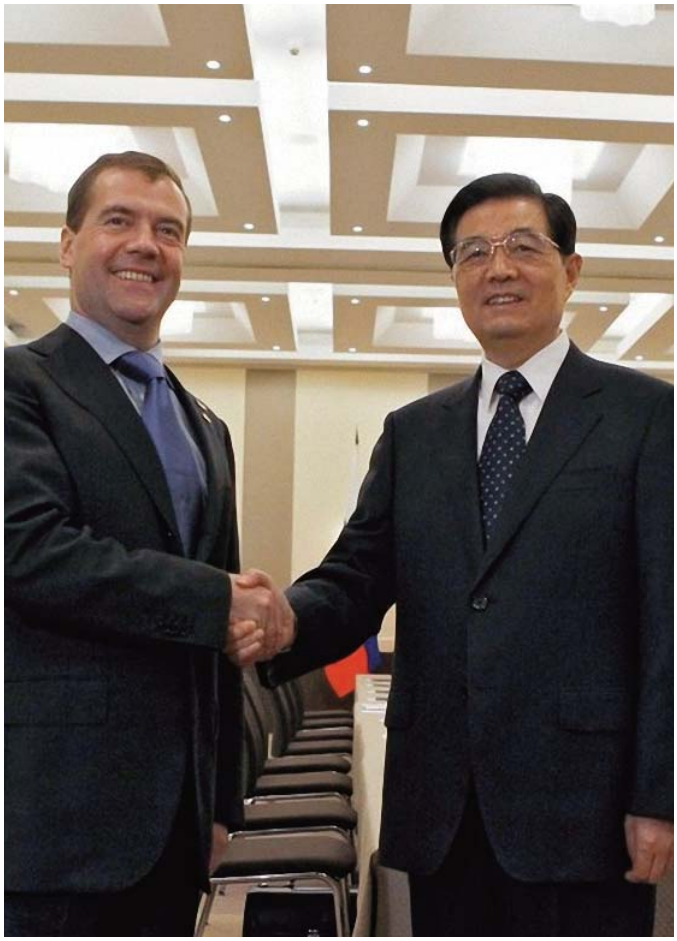
Ahora bien, hay que resaltar que los principales temas que atañen a la relación son el comercio de armamentos, temas de seguridad, y la energía, en parte el petróleo pero sobre todo el gas.

En lo que respecta al tema de la Seguridad, se han dado avances, en tanto ha habido coincidencias, en lo que respecta al control de la política nuclear de Corea del Norte. También en el reciente caso de Libia ambos países rehusaron vetar las Resoluciones 1970 y 1973 en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobando la acción de una fuerza multinacional bajo el mando de la OTAN en el conflicto armado desarrollado contra el régimen de Muammar Gadafi, sostuvieron, frente a la actual situación de Libia, que es necesario resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos.

En lo que respecta al comercio, según Putin, en el 2010 China ocupó el primer lugar entre los más importantes socios comerciales de la Federación Rusa, destacándose las exportaciones de venta de armamentos. Entre 1992 y 2007 se estas alcanzaron el monto de US$25 mil millones. Sin embargo, recientemente China ha diversificado su cartera de proveedores.

En lo que respecta al campo energético, el tándem Dmitri Medvédev- Vladimir Putin ha

señalado a este elemento como el más importante de la cooperación.
Si se refiere a las exportaciones de petróleo, Rusia es un socio fundamental para China, ya que para el año 2007 era su cuarto proveedor de crudo. Rusia suministra energía eléctrica a China, a través de dos plantas de producción para la exportación ubicadas en el Lejano Oriente. Sin embargo, el 75% de la producción eléctrica china sigue basada en plantas térmicas de carbón. Estas son altamente contaminantes, por lo cual su demanda de gas natural utilizado como combustible ha comenzado a incrementarse en estos últimos tiempos. En este sentido Rusia ha impulsado proyectos transnacionales para la explotación de yacimientos petrolíferos en Siberia Oriental. En este sentido, se puede señalar el oleoducto ESPO (Este de Siberia-Océano Pacífico, por sus siglas en inglés), el cual permitirá exportar el petróleo por vía marítima a Japón y Corea del Sur a través de la terminal de Kozmino, en la ciudad oriental de Vladivostok con un ramal intermedio que se dirigirá a Manchuria. Cabe destacar que China ha aceptado financiar a las compañías rusas, como así también se encargará de la infraestructura y la capacitación del personal.
Ahora bien, las reservas de Rusia en crudo no son suficientes, por lo cual no se encuentra en condiciones ventajosas a la hora de comerciar este producto con la Republica Socialista, cuya demanda de materias primas sigue aumentando.
En lo que respecta al gas, es mejor la posición de Rusia, ya que dispone de un 23,9 % de las reservas mundiales, (alrededor de 44,8 billones de metros cúbicos) y se encuentra bajo el control del consorcio estatal GAZPROM. El 30% del recurso se exporta principalmente a la Unión Europea. En cambio, China, este país cuenta con el 1,5% de las reservas de gas a nivel mundial, lo que no le permite satisfacer la demanda de la población, debiendo importar el recurso para hacer frente a esta situación.
En este orden, China ha aumentado sus lazos e influencia



con países de Asia Oriental, África y de América, logrando diversificar sus relaciones y socios para evitar una dependencia con Rusia. No obstante, esto no es impedimento para que los intentos por cooperar sigan en pie. En este sentido, en el 2009 Rusia y China firmaron un acuerdo según el cual a partir del 2015 comenzaría el suministro de 68.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al coloso oriental, a través de dos rutas: la del este, desde la Siberia oriental y la isla de Sajalín, y la del oeste, desde los campos de Siberia occidental. Sin embargo, no ha habido avances al respecto ya que existen diferencias en cuanto al precio de los recursos, puesto que China se niega a pagar la tarifa a precios europeos
Ahora bien: lo hay que analizar es cuál es el interés que cada uno de estos dos países tiene y cuáles son los beneficios. En este sentido, debemos ver cuál es la posición que cada uno de estos dos países conserva en la arena internacional.
Actualmente Rusia es el segundo productor y primer exportador mundial de petróleo, -detrás de Arabia Saudita-, y el mayor productor y exportador mundial de gas. Por su parte, China es una potencia en desarrollo, la segunda economía mundial en términos de PIB y uno de los mayores consumidores de materias primas. Hoy por hoy tiene amplias posibilidades de poder sortear los dilemas de la actual crisis gracias a su creciente desempeño económico y su amplio espectro de inversiones en distintos continentes, mientras que Rusia, podríamos decir, se mantiene expectante frente a los países de la Unión Europea, sumidos en una crisis socioeconómica.
Respecto al carácter que posee la relación entre estos dos gigantes, existe la teoría de quienes ven la dependencia china sobre Rusia, en tanto su demanda de materias primas continúa en aumento a medida que su población sigue creciendo vertiginosamente. Por otro lado, existe la tesis de quienes afirman lo contrario a lo recién planteado, en tanto China diversificó en estos últimos años sus mercados de materias primas.
En este sentido, teniendo en cuenta estas teorías y observando el panorama actual internacional, creemos que en lo que respecta a la cuestión energética (que, como se ha dicho, es la que mayor relevancia tiene en la relación) es notoria la necesidad por parte de la Federación Rusa de fortificar los lazos con China, lo cual se puede ver en un seguimiento de las reuniones entre ambos mandatarios como así también, declaraciones del Presidente y el Primer Ministro Ruso. Asimismo, hay una respuesta positiva por parte de China. Sin embargo, la Republica Socialista no se ve del todo dispuesta a aceptar ciertos términos de la relación. Su dureza se ve por ejemplo en el caso del precio del gas, pudiendo hacer esto gracias a que, como ya hemos señalado previamente, ha extendido su influencia por vastos continentes, disminuyendo su dependencia y alcanzando un mayor poder negociador.
En este sentido, se puede argumentar que en un contexto de una Europa en crisis y con un euro que se devalúa frente al dólar, la creciente asociación estratégica sino-rusa puede verse como un intento de este último país por ampliar sus mercados, teniendo una alternativa a la Unión Europea, atraer inversiones de China para la modernización de la infraestructura energética como así también para nuevos proyectos. Asimismo, desde una óptica geopolítica, se puede avizorar un intento de Rusia por contrarrestar la creciente influencia que ha logrado el coloso chino en estos últimos tiempos en Asia Central, patio trasero de la Federación.
En este sentido, dentro de sus intentos por avanzar en la cooperación con China, Rusia pretende dejar de ser un mero exportador de materias primas para poder jugar un juego más parejo con esta nueva potencia, como así también, pretende, apostando a sus recursos energéticos erigirse en un polo necesario para China y Asia Oriental.

POR AGUSTINA LOVERA

MYANMAR: EL DESMANTELAMIENTO DE LA DICTADURA BIRMANA

El gobierno de la República de la Unión de Myanmar dio un nuevo paso hacia el desmantelamiento de medio siglo de dictadura y un claro avance en el proceso de democratización, con la liberación de 6.359 presos políticos.

Esto refleja la voluntad de los nuevos gobernantes de romper el aislamiento que sufre el país, y sentar las bases para que los Estados Unidos y Europa levanten las sanciones económicas y políticas impuestas contra la Junta Militar que ha controlado con puño de hierro el país y de la que han salido los actuales dirigentes.

La amnistía fue aprobada después de que la nueva Comisión para los Derechos Humanos, establecida el pasado 9 de setiembre, pidiera por escrito al presidente, el ex general Thein Sein, la liberación de los "presos de conciencia", es decir, aquellas personas encarceladas por su raza, religión o color de piel, idioma, orientación sexual o credo, que no hayan practicado la violencia.

Esto se remite a que, desde finales de 2007, unas 2.000 personas fueron encarceladas por motivos políticos en Myanmar, aproximadamente la mitad de ellas por su participación pacífica en la "Revolución Azafrán" del pasado 2010.

El diario gubernamental, Nueva Luz de Myanmar fue el encargado de dar a conocer la carta abierta publicada, en la cual la Comisión para los Derechos Humanos pide al mandatario birmano que permita la excarcelación de todos los prisioneros políticos que "no supongan una amenaza para la estabilidad del Estado".

Amnistía Internacional ha señalado que, si las autoridades tienen motivos para creer que los presos políticos han cometido un delito reconocido internacionalmente, deben someter a esos presos a un juicio justo, inmediato y público. De lo contrario, deben ponerlos en libertad incondicional sin demora.

En Myanmar, los presos políticos son acusados habitualmente en virtud de leyes vagamente redactadas, en su mayoría relativas a cuestiones de seguridad u orden público, que permiten una interpretación excesivamente amplia por parte de las autoridades.

Las condiciones de reclusión en el país incumplen numerosas normas internacionales. La comida, el agua y la atención médica son insuficientes, muchos presos políticos son recluidos lejos de sus familias, y la mayoría han sido sometidos a tortura y otros malos tratos, tales como reclusión prolongada en régimen de aislamiento.

Según lo expresado por el diario El País, tanto los opositores en el exilio como los activistas de Derechos Humanos, consideran que en las cárceles birmanas hay más de dos mil prisioneros de conciencia, algunos de los cuales llevan décadas recluidos.

En enero de 2011, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades de Myanmar negaron tener recluido a ningún preso político, y afirmaron que todos los encarcelados eran delincuentes. En agosto de este mismo año, el teniente general Ko Ko, ministro del Interior de Myanmardijoal relator especial de la ONU que "más de 100 presos" a los que se calificaba de presos de conciencia habían cometido delitos penales.

Ante tal acontecimiento, la respuesta de los Estados Unidos no tardó en llegar cuando el subsecretario de Estado, Kurt Campbell, durante una conferencia celebrada en Bangkok, reconoció que Washington puede tomar medidas para mejorar sus relaciones con Myanmar gracias a los importantes cambios introducidos por el gobierno birmano. El subsecretario dio por sentado el levantamiento de las sanciones, si se seguían tomando las medidas adecuadas para la liberación de los presos de conciencia.

Está claro que este proceso de democratización, por el que pocas personas apostaban, hoy se ha acelerado. El Presidente Thein Sein hizo un llamamiento a los exiliados para que vuelvan al país e hizo hincapié en que se van a poner en marcha medidas que garantizarán "el buen Gobierno, la transparencia y las practicas democráticas".

Si bien la liberación de algunos presos políticos es una medida positiva, la reforma largamente requerida del represivo aparato judicial y de seguridad sigue sin producirse. Es menester que todo compromiso significativo por parte de las autoridades para con la reforma política en Myanmar, debe incluir poner fin a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra su propia población.

POR AGUSTINA LOVERA

EL TRATADO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INDO-AFGANO

El pasado 4 de octubre, el Primer Ministro de India, Manmohan Singh, y el Presidente de Afganistán, Hamid Karzai, firmaron en Nueva Delhi un tratado de asociación estratégica, siendo éste el primero que Afganistán firma con otro país. El mismo se remite a una serie de acuerdos en materia de economía y seguridad, lo cual demuestra un gran ejemplo de la fuerte y amplia colaboración entre los dos Estados.

El objetivo del tratado, es el de reforzar la seguridad de Afganistán, por un lado, de cara a la salida de las tropas de la OTAN en 2014; India, por su parte, no ha dudado en ofrecer a su vecino entrenar a la policía afgana en la lucha contra el terrorismo. Si bien los dos representantes han enfatizado que el pacto no va dirigido contra ningún otro país sino a facilitar la pacificación de la región, ya que ambos han reconocido que se sienten amenazados por los talibán de la red Haqqani; el acuerdo alcanzado podría despertar sospechas en Pakistán, que desconfía de la relación entre sus dos vecinos. Vale la pena destacar que hasta la fecha, el gobierno de Kabul no había suscrito ninguna alianza estratégica con ningún país del mundo, ni siquiera con Estados Unidos, principal gestor de la invasión y la guerra en Afganistán, que transcurridos diez años todavía continúa.

Sin dudas este tratado de "asociación estratégica" es un punto clave, ya que determinará cambios geopolíticos notables en una zona del planeta muy sensible. Y es que, a primera vista, es difícil comprender la lógica que motivó a las partes a firmar un tratado que implica, ante todo, compromisos serios y responsabilidades, sobre todo cuando los países implicados tienen tan poco en común. El gran interrogante que se plantea es la razón que motiva a India a meterse en un país tan inestable como es Afganistán.

India, potencia nuclear, con una población de millones de habitantes (el segundo país más poblado del mundo), una de las economías en desarrollo más fuertes, integrante del BRICS (bloque que agrupa las principales naciones emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); quien de repente acepta convertirse en socio estratégico de Afganistán, un país extremadamente atrasado y pobre, cuya economía depende de la exportación de heroína, ocupado por tropas extranjeras y victima de una sangrienta guerra civil.

"...hasta la fecha, el gobierno de Kabul no había suscrito ninguna alianza estratégica con ningún país del mundo, ni siquiera con Estados Unidos, principal gestor de la invasión y la guerra en Afganistán, que transcurridos diez años todavía continúa."

A rasgos generales, India y Afganistán no comparten ningún parentesco idiomático, cultural o histórico, tampoco tienen fronteras comunes que les permita comerciar y el territorio afgano no tiene salida al mar. Teniendo en cuenta esto, la alianza indio-afgana parece ser extraña, sin lógica y desigual, y lo que más despierta curiosidad son las razones que impulsaron a las partes a dar semejante paso.

Intentando dar una respuesta, se podría indicar que la India es uno de los principales donantes de ayuda a Afganistán, quien recibe más del 50% de la ayuda que Nueva Delhi destina al exterior. Y este último, estaría muy interesado en la estabilidad de su socio, después de que se retiren las tropas de la OTAN, ya que otra guerra civil en Afganistán tendría consecuencias en la seguridad de India por la inestabilidad que generaría en la región y la posibilidad de un incremento de atentados de radicales islamitas.

Más allá de esto, lo único que tienen en común los nuevos socios es Pakistán, vecino que precisamente se encuentra como una cuña entre los territorios de India y Afganistán. Un contiguo un poco molesto, a decir verdad, porque causa muchos problemas y desde ese punto de vista, se podría pensar que, aunque sin ventajas aparentes para las partes, la alianza indio-afgana se podría haber pactado para ser dirigida

contra Pakistán.
Los voceros de los dos Estados aseguran que la alianza obedece al "cansancio", por una parte, de Karzai con el involucramiento del poderoso servicio de inteligencia paquistaní (ISI) en las acciones terroristas de los Haqqani en Afganistán.
India, por otro lado, también acusa al ISI de apoyar a grupos como Lashkar y Toiba, que lucha por la independencia de la Cachemira india y que, según Nueva Delhi, es el responsable de los atentados de Bombay de 2008; y que la ISI esta detrás de los ataques contra los intereses indios en Afganistán, incluido el ataque a la Embajada india en Kabul.

Desde la mirada de Kabul, Pakistán es un vecino hostil porque apoya a la guerrilla Talibán, fuerza política y subversiva que desde hace años encabeza una guerra para derrocar al gobierno afgano.
Según una entrevista de la BBC, Sirayudin Haqqani, actual jefe del grupo talibán más combativo, afirma que los contactos con el ISI fueron en la época de la lucha contra la invasión soviética de Afganistán (1979-1989), periodo en que también los mantenían con la CIA, pero que ahora esos lazos no existen. Sirayudin Haqqani sostiene que Estados Unidos le ha contactado para que forme parte del Gobierno afgano.
Si bien el gobierno de Pakistán rechaza esas acusaciones al afirmar que también es victima del terrorismo, en la Comunidad Internacional se recela mucho la presunta inocencia de este país.

"Desde una perspectiva estratégica, a India le conviene tener un Pakistán acorralado por ambos costados, ya que podría negociar Cachemira desde una postura de fuerza, y en general para Nueva Delhi la asociación con Afganistán le abre buenas perspectivas en el mercado energético"

Desde una perspectiva más estratégica, a India le conviene tener un Pakistán acorralado por ambos costados, ya que podría negociar Cachemira desde una postura de fuerza, y en general para Nueva Delhi la asociación con Afganistán le abre buenas perspectivas en el mercado energético y un mayor lugar a la hora de competir con otros gigantes como China y Rusia. Como contrapartida, en estas condiciones el gobierno pakistaní tiene poco espacio de maniobra, y tal vez, esto es lo que India realmente busca, que Pakistán este bajo control.
Es interesante destacar que India y Pakistán han luchado cuatro guerras desde su creación en 1947: tres veces por territorio en Cachemira y una por la lucha en Bangladesh para lograr su independencia de Pakistán. Y si bien la India nunca ha perdido, Pakistán nunca se ha rendido.
Ya en este siglo, la atención mundial se concentró en el ataque terrorista al Parlamento indio y la subsiguiente confrontación entre indios y paquistaníes que estuvo a punto de desembocar, en 2002, en la primera guerra nuclear mundial, pero la retirada de Nueva Delhi en el ultimo minuto y su rechazo a movilizar tropas tras los atentados terroristas de Bombay en noviembre de 2008 sugiere que otra guerra a gran escala entre ambos países es mucho menos probable de lo que se llego a pensar alguna vez. La razón tal vez se pueda encontraren que la actual fuerza militar de Pakistán simplemente no se puede comparar con la de la India, si bien los primeros tienen un notable arsenal nuclear, misiles y una bien equipada fuerza aérea.
Solo restará esperar los siguientes pasos a seguir de esta nueva alianza, las repercusiones en Pakistán y el papel que los Estados Unidos jugarán dentro de este triángulo.

POR NOEMÍ RABBIA

"LO IMPORTANTE ES QUE GADAFFI DESAPARECIÓ"

Muammar Gadaffi ha muerto en circunstancias aún no esclarecidas durante la toma de su ciudad natal, Sirte. Muy probablemente el esclarecimiento de este hecho se diluya en la euforia y la vertiginosidad de los sucesos por venir. Pero "lo importante es que Gadaffi desapareció", según afirmó el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ante los medios internacionales. Más allá del infantilismo político y la escasa profundidad en relación a las especificidades del caso, resulta por lo menos interesante desglosar esta frase que no por poco seria es menos cierta. La desaparición de Gadaffi de la escena política libia es un nuevo comienzo para algunos, pero también un alivio para otros.

Para Barack Obama, que Gadaffi haya desaparecido discursivamente significa que ha llegado la hora del pueblo libio. Es así como, horas después de confirmada su muerte, el presidente estadounidense afirmó: "Ha desaparecido un dictador que gobernó con mano de hierro 42 años". Poco se habla ahora de los últimos años de la relación de Libia con los Estados Unidos, de la inexistencia de los enemigos permanentes que predicaba algunos años atrás Condolezza Rice y de los suculentos negocios que las empresas petroleras norteamericanas habían vuelto a desarrollar en Libia.

Para la OTAN es importante porque pone fin a otra sangrienta y vergonzosa intervención del brazo armado del Atlántico, cuya misión jamás fue clara, precisa y efectiva en cuanto a sus objetivos manifiestos. Una vez más, como en otros casos, la OTAN le ha echado la culpa a errores técnicos por la muerte de civiles inocentes impactados por misiles de la organización, argumentando una "confusión en los objetivos".

Para Sarkozy, es importante que Gadaffi haya desaparecido porque esto pondrá fin al conflicto cuya participación le ha costado primero justificar y luego sostener, con un penoso traspaso de la operación a las fuerzas de la OTAN. El papel cumplido aquí por el mandatario francés respondió a una necesidad política interna puntual de Sarkozy, quien seguramente vislumbró el destello de un gran "retorno" político personal y la esperanza de un nuevo despliegue estratégico de Francia en el mundo árabe, llevando como estandarte la defensa de los valores. Un medio quizá para reencontrar los acentos de su elección de 2007, cuando prometía que Francia "estaría del lado de los oprimidos". Tras el fracaso de este intento, su pretendida imagen de líder en situaciones de conflicto ha dado paso a la del hombre recogido en el seno de su hogar junto a su esposa y su flamante hija como una postal de la cuasi perfección y armonía moral.

Con la desaparición de Gadaffi y el triunfo de las fuerzas rebeldes, todos los pecados de los últimos 7 meses serán redimidos o, cuando mucho, simplemente olvidados. Las palabras de Joe Biden resumen no sólo el fin de una historia personal y nacional que data de al menos cuatro décadas, sino que también representa un silencioso suspiro de alivio que recorrerá los principales bastiones políticos de Occidente.

La pesadilla del juicio público a Gadaffi

En junio de este año la Corte Penal Internacional había ordenado el arresto de Gadaffi, de su segundo hijo, Seif al Islam, y su cuñado, Abdulá al Senusi, acusados de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Libia desde febrero, durante las revueltas en ese país magrebí. No obstante, la violenta muerte de Gadaffi abre un abanico de interrogantes sobre el desenlace de los acontecimientos y los posibles hechos políticos que encerraría el trágico final del Rais libio.

El relato oficial atribuye la ejecución a Ahmed Al Shebani, un joven de 18 años. Gadaffi había sobrevivido al bombardeo de la OTAN para luego ser ejecutado, no por piedad, sino por conveniencia; no por un sentimiento voraz de venganza, sino más bien por profundas y complejas causas políticas.

Por un momento, podemos pensar que ni la OTAN, ni los principales líderes de Occidente, ni el Consejo Nacional de Transición (CNT) querían a Gadaffi vivo, y aún menos querían un largo juicio público que pudiera dividir a Libia y que resultaría complicado para varios países y sus gobernantes, por las relaciones que muchos mantenían con el líder, y más aún, los negocios en los cuales este vínculo se enmarcaba.

Como se refleja en diversos medios, es posible que nunca

se sepan exactamente los pormenores del hecho que desencadenó su muerte: si Gadaffi opuso resistencia, si fue herido horas antes por un ataque aéreo de la OTAN o si fue ultimado por un combatiente, ya que los nuevos líderes en Libia tendrían interés de mostrarlo como un cobarde que se escondía en un agujero, tratando de huir de sus captores. Una historia que replica lo ocurrido a finales de 2003 en Irak, con la captura de un irreconocible Saddam Hussein.

Más aún, su enjuiciamiento público hubiera puesto de manifiesto declaraciones vinculadas a países como España, Francia, Gran Bretaña, Italia y los Estados Unidos, quizá no con el suficiente impacto para generar malestar al interior de esos países, pero sí un rechazo generalizado del pueblo libio a su participación en la reconstrucción de Libia y en el nuevo futuro político libio.

De acuerdo a informes de la Agencia de Noticias Inter Press Service, entre 2008 y 2009 varios países europeos vendieron armas a Libia por 595 millones de euros, destacándose en las ventas Italia, socio económico y comercial histórico de Libia. La Autoridad de Inversión de Libia es propietaria del 2% de las acciones de la compañía italiana aeroespacial y de defensa, Finmeccanica, la cual restauró helicópteros de carga pesada CH-47 y fue contratada para reformar el vehículo de artillería pesada Palmaria, desarrollar proyectos de seguridad fronteriza, y a quien se le compró equipos y aviones de vigilancia por cientos de millones de euros a Finmeccanica en los últimos años.

Los Estados Unidos dedicaron 300 millones de dólares durante el año 2010 a entrenar a fuerzas de Gadaffi dentro del programa Capacitación y Educación Militar.

Además, Gadaffi incrementó su arsenal con misiles antitanques Milan de Francia. La compañía británica GDUK suministró un sistema de comunicación para usar en los tanques T-72 y la francesa Dassault renovó varias más, incluido el avión caza Mirage F-1. Una compañía belga vendió rifles de alta tecnología hace unos años y una italiana realizó otro envío para uso de la policía.

España, por su parte, es el sexto mayor exportador de armas del mundo, y si bien no tiene a Libia entre sus principales clientes, aun así le vendió armas por 4 millones de euros. Según el diario El País, “Si la operación aérea se hubiera demorado, la coalición se habría enfrentado con una defensa aérea mucho más sofisticada. La empresa española Indra tenía un contrato de 200 millones de euros para modernizar el sistema de defensa aérea de Trípoli. El contrato incluía nueve radares tridimensionales; centros de mando y control, equipos de guerra electrónica y sistemas de comunicaciones”.

Más allá de la polémica que podría darse acerca de quiénes proveían el arsenal libio a la par que públicamente condenaban las violaciones de derechos por parte del régimen, lo realmente importante para estos actores es que Gadaffi ha desaparecido y la democracia ya está llegando a Libia.

¿De la era jamahirí a la democracia?

Libia es un país cuyo pueblo alcanzó en los últimos años el nivel de vida más alto de África, hecho en el cual el plan de gobierno de Muammar el Gadaffi tuvo mucho que ver a través de la gestión de las riquezas naturales en beneficio de los estratos más pobres de la sociedad, no sin ganarse por ello numerosos enemigos.

Entre sus aciertos, el gobierno jamahirí elevó el papel de la mujer en la sociedad, les abrió el camino a las universidades, no sólo a ellas, sino a los estratos de menores ingresos de la sociedad libia; supo aprovechar que Libia es dueño del segundo acuífero del mundo situado bajo las arenas del desierto, para construir un canal que lleva esa agua hasta la costa del Mar Mediterráneo, en la zona de Benghazi, desde donde vendía agua a Egipto e hizo de su enorme litoral una franja verde de cerca de 200 kilómetros donde se ubican las ciudades libias, desde la frontera con Túnez hasta la frontera con Egipto; utilizó el petróleo como herramienta de negociación internacional y los beneficios de su explotación para la promoción de inversión externa directa en los sectores no petroleros del país, como el turismo y el sector agrícola; destinó miles de millones de petrodólares para incrementar el poder africano y asistir a sus vecinos más pobres, lo cual le valió el apodo de “Rey de Reyes” en el continente.

Entre sus excesos, se cuentan la falta de libertades políticas, la represión, persecución y muerte de los enemigos del régimen y el enfrentamiento con sectores de las fuerzas armadas, la clase media libia y algunos clanes del país debido a la concentración de poder en las manos del líder de la Revolución. La corrupción, la entrega del control de sectores claves

de poder a las tribus aliadas a su gobierno, las excentricidades del líder y su familia y el apoyo a las empresas internacionales destinadas a posicionar al país como líder de la región y el continente africano con un discurso anti-occidental que sin embargo se suavizó post 11-S.
La vida y estructura tribales en Libia fueron un patrón predominante en la historia del país desde mucho antes de su independencia. Durante la monarquía de Idris I, quien había delegado parte de su autoridad en poderosas familias locales, las cuales consolidaron esta base de poder a través de lazos matrimoniales, el "tribalismo" fue un elemento central del Reino Unido de Libia pero también determinó su destino porque muchos libios sentían que su futuro recaía en las decisiones de unos pocos en situación privilegiada.
En función de esto, el gobierno de la Revolución de 1969 se opuso a la influencia ejercida por estos clanes en los asuntos políticos del país, por lo cual buscó debilitar las lealtades tribales existentes y destruir sus organizaciones. Sin embargo, y pese a los esfuerzos del régimen, los factores ideológicos nunca tuvieron el mismo peso que los lazos tribales y de sangre.
No obstante, desde los orígenes de la conformación del régimen jamahirí, Gadaffi fue una figura emblemática que tuvo la virtud de resumir y canalizar a través de su imponente imagen gran parte de las divergencias entre los diferentes sectores de la sociedad libia. Históricamente el país se encontró fragmentado no sólo por las diferencias sociales vinculadas a la educación y la calidad de vida, sino principalmente a la pertenencia a diferentes tribus.
Al mismo tiempo, desde la instauración del sistema jamahirí las arcas del Estado libio se vieron notablemente favorecidas por una serie de nacionalizaciones en relación a la producción de petróleo y en la que gran parte de las ganancias de dicha actividad era canalizada a través de la empresa nacional petrolera libia, National Oil Corporation. Esta riqueza originada por el petróleo fue la que motorizó el modelo jamahirí el cual se basó en la idea de justicia social y no alineamiento internacional.
Habiéndose desdibujado la figura de Gadaffi del panorama político libio, los "sinceros" creyentes del llamado orden liberal internacional celebran la llegada de la democracia a suelo libio. El presidente del CNT, Mustafá Abdeljalil, ha declarado en numerosas ocasiones que la conquista definitiva de Sirte abriría la vía para el anuncio de la liberación de la totalidad del territorio libio para, a continuación, dar curso a la formación de un Gobierno de transición encargado de dirigir el país hacia la democracia.
Pero ¿es posible la democracia en Libia? Corremos el riesgo de dejarnos llevar una vez más por las lecturas apresuradas sin mediar las especificidades del caso libio. Porque el panorama actual arroja no sólo divisiones existentes en el seno de la sociedad libia, sino también al interior del CNT y de las fuerzas rebeldes.
¿Cuál será el destino de los resabios de las fuerzas leales al ex Coronel? ¿De dónde provendrán y cuáles serán las directivas para hacer frente a esta situación de caos post conflicto? Y más importante aún, ¿Cómo podrá evitarse un nuevo derramamiento de sangre en la era post Gadaffi si en el pasado reciente las fuerzas rebeldes ni siquiera pudieron sostener una decisión unívoca sobre el destino final del líder libio, el cual se decidió en el fervor de la lucha?
Algunos temen que la brutal muerte de Gadaffi, lejos de traer paz, reavive las luchas internas, porque tal hecho ya lo ha transformado tanto en un mártir para sus partidarios como en el símbolo que podría recrudecer los intentos de resistencia desde las sombras. De la misma manera, la relación entre la OTAN y el CNT y el violento y poco claro desenlace de los acontecimientos pueden jugarle en contra a los nuevos gobernantes libios.
En los planes post conflicto está la formación de un gobierno de transición en un plazo de 30 días y posteriormente, en un plazo de 240 días, la formación de una Conferencia Nacional de 200 miembros para que nombre un primer ministro que, a su vez, dará forma a un nuevo Gobierno. Sin embargo, muchos temen que las disputas políticas que podrían surgir en medio de este largo proceso tensione la endeble alianza conformada en torno a los diferentes liderazgos regionales, habiéndose diluido el elemento que los aglutinaba: la persecución de Gadaffi y el fin de su gobierno.
Por otra parte y de cara al desafío de elaborar una nueva normativa nacional para el país, cabe preguntarse qué ocurrirá con las virtudes del sistema jamahirí, como muchos de los preceptos de igualdad, equidad y soberanía popular enunciados en el Libro Verde que rigió gran parte de la vida libia en los últimos treinta años. ¿Lograrán contenerse los integrismos que Gadaffi había mantenido a raya desde los inicios de la Revolución? ¿Y cuál será el grado de involucramiento que se permitirá a las potencias occidentales tener en el nuevo futuro libio, después del anti-occidentalismo y marcado nacionalismo que rigió en el país desde el triunfo de la Revolución?
En líneas generales la democracia es una forma de organización en que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros; dicha voluntad colectiva se materializa en la elección de representantes del pueblo. Pero Libia posee una realidad política distinta de otros países, ya que su composición es eminentemente de clanes, al menos 150 diferentes. Y esto no hace más que renovar la pregunta de hacia dónde se dirige Libia, más allá de su inexperiencia política. Hablamos de la necesidad de refundar un sistema político por completo si lo que se hace es derribar todas las estructuras propias del gobierno jamahirí, las cuales han organizado la vida política del país desde 1977.
Antes de finalizado el conflicto con la muerte de Gadaffi, la producción petrolera se reanudó más rápida y efectivamente de lo que llegó la ayuda humanitaria a dicho país. Este hecho pone de manifiesto cuáles son las prioridades de Occidente en un país que vivió bajo la regla paternalista de aquel hombre de origen beduino, formación militar y fuertemente influenciados por las ideas provenientes del partido Baath en Siria y el nasserismo.
Veremos si con el tiempo se confirman las temidas sospechas que gran parte de la comunidad internacional posee sobre el desmedido interés de las potencias occidentales sobre los recursos libios.
¿Hasta qué punto la democracia hará pie sobre suelo libio más allá de su forma procedimental? ¿Hasta qué punto el nuevo gobierno no será funcional al saqueo de los recursos libios?
Pero en fin, lo importante es que Gadaffi ha desaparecido y ya nada se interpone entre los intereses económicos que éste siempre se decidió a contener y la "Libia democrática por venir".

"...la producción petrolera se reanudó más rápida y efectivamente de lo que llegó la ayuda humanitaria. Este hecho pone de manifiesto cuáles son las prioridades de Occidente en un país que vivió bajo la regla paternalista de aquel hombre de formación militar y fuertemente influenciados por las ideas provenientes del partido Baath y el nasserismo."

POR PAULA MARTÍN

MALOS VECINOS

El nordeste de Kenia siempre fue una zona difícil y problemática. El territorio formaba parte de la "Gran Somalia", región culturalmente homogénea, atravesada por una estructura de organización social clánica, que con posterioridad a la época colonial se dividió entre la actual Kenia, ex colonia británica, y zonas bajo la influencia italiana y Francesa, , Yibuti hoy Etiopía. Hasta esta división geográfica se puede rastrearse el inicio de los conflictos que caracterizan la historia de vecindad entre los actuales Estados, a los que, con el tiempo, se han ido sumando las consecuencias de las rivalidades religiosas, políticas y las intervenciones internacionales.

El 16 de Octubre el ejército keniata inicio la Operación Linda Nchi o Protección de la Nación, por medio de la cual se adentró en territorio somalí con el objetivo declarado de proteger sus fronteras de las constantes incursiones del grupo islamista Al Shabaab, acusado por el gobierno keniata del secuestro de tres turistas europeos y trabajadores humanitarios al norte del país. Para el gobierno de Nairobi, el aumento de la inestabilidad y la inseguridad en la región, provoca un duro golpe a la economía regional, principalmente a la industria turística, una de las más importantes del país.Por su parte, en Somalía, Al Shabaab, a quien se acusa de presuntos vínculos con Al Qaeda, y forma parte de la lista norteamericana de grupos terroristas, ha librado una insurgencia armada contra el Gobierno Federal de Transición desde 1991, cuando el gobierno del General Syad Barre, un adherente al socialismo que contaba con el apoyo de la URSS, fue destituido. Desde ese momento el panorama político comenzó a fragmentarse, al tiempo que aumentaba la rivalidad entre las diferentes facciones y clanes. En la actualidad, el Estado se encuentra virtualmente dividido en cuatro regiones administrativas. El noreste, donde la reformulación de las alianzas y la estructura social llevaron a la proclamación de la independencia de Somoliland, que al dia de hoy aun no ha recibido reconocimiento internacional. En el noroeste, la región de Puntland, que también proclamó su autonomía, pero sin renunciar a formar parte del Estado central. Por último, las regiones centro y sur, la primera es la sede del Gobierno Federal de Transición, creado en 2004 en Kenia, con el apoyo financiero y militar (en lo que a provisión de armamentos se refiere) de EEUU, Europa, ¿las Organizaciones Internacionales? ¿cuáles?. Y el sur, bajo el control de Al Shabaab, donde se encuentra la capital, Mogadiscio.

Durante la década del ´90, el territorio fue objeto de intervención, por parte de EEUU (1992/1993) y por Mandato de Naciones Unidas (1993/1995) con resultados más que escasos en la pacificación del país, hoy, con el apoyo de Naciones Unidas, se despliega el mandato de la Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISON) conformada por soldados de Burundi y Uganda.

Frente a este escenario, es evidente que Kenia debe hacer frente en sus fronteras a la amenaza de un vecino que no posee un gobierno efectivo desde inicios de la década del `90, y aunque establecer de zonas de seguridad en la frontera puede ser una alternativa atractiva, la intervención parece implicar serios riesgos para el país. En principio, para algunos analistas está en dudas la capacidad real de las fuerzas keniatas de sostener una intervención prolongada y enfrentar a Al Shaabab quien, por su parte, ha demostrado con los ataques perpetrados en Uganda en 2010, tener una importante capacidad para golpear dentro y fuera de su territorio, así como las constante demostraciones de fuerza que significar el cruzar continuamente las fronteras vecinas. Además es poco probable que el ejército keniata cuente con los medios necesarios para garantizar la seguridad de la población civil en la zona de enfrentamiento, que ya han sido víctimas de los ataques, así como, proteger a los mas de 380.000 refugiados somalíes que alberga el campo de Ifo, en Dabaad, Kenia, uno de los campos de refugiados mas grandes del mundo.

Al Shabaab está haciendo uso de una de las armas más importantes para el control de la población: el control de la distribución de alimentos.

El mismo, aplicado en medio de una de las hambrunas más devastadora de la historia, implica, entre otras cosas, la prohibición del trabajo de las organizaciones de ayuda humanitaria en el territorio bajo su dominio. Nadie puede negarle a Kenia el derecho a defender a sus ciudadanos y a los recursos que constituyen la principal fuente de ingresos del país. Pero, ¿puede darse el lujo que inmiscuirse en un conflicto armado con una milicia extranjera con el objeto de defender un modelo de desarrollo basado en la industria turística? ¿Con el apoyo de quiénes cuenta y cuáles son los objetivos últimos del despliegue de fuerzas?

Un dato importante a tener en cuenta para el futuro desenlace del conflicto es la política que el gobierno de EEUU, apoyado por la Unión Europea, está desarrollando en la región. Dos días antes de la intervención de Kenia, EEUU anuncio la decisión de enviar "asesores militares" a Uganda, para entrenamiento de las fuerzas nacionales y así contribuir a la lucha contra el Ejercito de Resistencia del Señor (ERS), un grupo armado que profesa el extremismo cristiano en Uganda. Esta misión será encomendada al AFRICOM. La organización, es la herramienta por medio de la cual EEUU lleva a cabo la reconfiguración de su estrategia para la región, en la que se prioriza, por medio de intervenciones indirectas, el control y accesos a fuentes de recursos naturales, y la obstaculización del avance de competidores como China y Rusia. La elección de Uganda como centro de operaciones permite a EEUU tener una posición central desde donde se entrecruzan cuestiones vitales de seguridad para Norteamérica: inestabilidad político-económica y terrorismo.